



INFORME DEL XVIII PLENO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PCE

El Comité Central del PCE muestra su pesar por el fallecimiento en el día de hoy del poeta Carlos Álvarez, militante comunista, referencia cultural de la lucha contra la dictadura franquista y en defensa de la clase obrera.

I.- Resumen informe coyuntura internacional. A los problemas causados por la pandemia, se une el repunte de la inflación en Europa y Estados Unidos, que puede dificultar la recuperación económica. La deuda pública de Estados Unidos ha superado, en enero de 2022, los 30 billones de dólares, una desmesurada cifra que el Departamento del Tesoro estadounidense no esperaba alcanzar hasta dentro de varios años.

Las conversaciones de Rusia con Estados Unidos y la OTAN no permiten vislumbrar aun avances en la distensión. Moscú constata que Washington pretende continuar con la expansión de la OTAN a lo largo de sus fronteras, desde el Báltico hasta el Mar Negro. Rusia exige a Estados Unidos y la OTAN garantías jurídicamente vinculantes que excluyan cualquier nueva expansión de la Alianza occidental (con mención expresa a Ucrania y Georgia) y que no desplieguen sistemas de armas ofensivas cerca de las fronteras rusas. La respuesta estadounidense ha sido negativa, sin aceptar las preocupaciones de seguridad rusas y continuando con el cerco militar al bloque euroasiático que incluye a Rusia y China.

Por su parte, la Unión Europea prorroga las sanciones a Rusia, Gran Bretaña ha enviado más tropas a países limítrofes con Rusia, y Biden anuncia el inminente envío de más soldados a la zona. La ministra Robles ha destacado por un inusitado y desmesurado fervor atlantista impropio de un gobierno progresista. El reconocimiento de las repúblicas populares del Donbás que ha realizado Rusia, aunque viene a incrementar la tensión, no es el corazón de la actual tensión en Ucrania y en Europa.

El estallido de esta crisis no puede desvincularse de su origen: la constante expansión de la OTAN en Europa oriental, hasta las mismas fronteras rusas, y el golpe de Estado del Maidán que impulsaron Estados Unidos y sus aliados en Ucrania en 2014. La resistencia al golpe de Estado en buena parte del país fue aplastada en aquellos días por el ejército ucraniano. Desde entonces, el gobierno ucraniano se ha adentrado en una peligrosa aventura apoyando a Estados Unidos y la OTAN en sus planes de expansión en Europa del Este, reclamando además su incorporación a la Alianza atlántica a sabiendas de que ello representaría un grave peligro que Rusia no puede ignorar: Moscú quedaría

a apenas diez minutos de ser bombardeada por hipotéticos misiles norteamericanos desplegados en Ucrania.

A pesar de lo anterior, el PCE es crítico con el discurso de Putin, que ha tenido rasgos propios de los actuales liberales rusos, y con las mismas tesis imperiales rusas que lleva repitiendo los últimos años, mostrando una actitud anticomunista y antisoviética que en ocasiones ha rayado el ridículo, probablemente con el resultado de alimentar el soberanismo y el nacionalismo ucraniano antifruso. El reconocimiento de las "republicas" parece enterrar los acuerdos de Minsk que el gobierno ucraniano rechazaba. Previsiblemente aumentará la presión general y saldrá reforzada una OTAN que en los últimos años adolecía de una seria parálisis.

Al cierre de este informe nos llega la noticia de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha ordenado el inicio de una "operación militar" rusa en Ucrania. El PCE está en contra de las guerras, y condena esta grave decisión de Putin, cuyas consecuencias pueden ser incontrolables, máxime con el riesgo de que se extienda la guerra en la región. Es un fracaso colectivo porque la seguridad de Europa, Ucrania y Rusia son inseparables. Todos los países, y también Rusia, deben respetar las reglas del multilateralismo, de la resolución pacífica de conflictos, y la estricta aplicación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, como única forma de prevenir la destrucción de la humanidad.

La responsabilidad por lo que está ocurriendo también recae en todos aquellos, empezando por la OTAN, que han propiciado la confrontación, permitiendo la desestabilización de Ucrania por la ultraderecha e intentando ampliar la OTAN hacia el este.

Es necesario parar la escalada bélica y proteger a la población civil de todos los pueblos implicados, organizar la contestación a la guerra y la exigencia de detenerla.

España debe trabajar para que Europa, bajo los auspicios de la ONU, ponga en marcha una iniciativa para volver a traer a todas las partes a la mesa de negociaciones, sobre la base del contenido de los Acuerdos de Minsk y los principios de seguridad colectiva.

China, aunque mantiene una deliberada prudencia en la crisis, apoya a Rusia en sus "legítimas preocupaciones por su seguridad" que Pekín considera un componente fundamental para la estabilidad internacional.

Estados Unidos continúa presionando a China. A finales de 2021, se realizaron las maniobras navales ANNUALEX 2021 en las proximidades de Taiwán, Filipinas y el Mar de China meridional, con participación de buques de guerra australianos, canadienses, alemanes, japoneses y estadounidenses. En el Mar de China meridional continúan las operaciones navales estadounidense, que además ha conseguido en los últimos meses que buques de guerra japoneses se hayan incorporado a patrullajes conjuntos en varias ocasiones, lanzando un evidente mensaje a China. A finales de enero, la entrevista de Biden y Kishida se centró también en China, con referencias a Hong Kong, Xinjiang y Taiwán y a la

supuesta "expansión china" en la gran región del Índico y del Pacífico. Biden se felicitó por el aumento de casi un diez por ciento del presupuesto militar japonés. Una consecuencia de esos encuentros bilaterales ha sido la resolución aprobada por la Cámara de Representantes de Japón sobre los derechos humanos en China, alegando "gran preocupación" por la situación en Xinjiang, Tíbet, Mongolia Interior y Hong Kong.

Las elecciones legislativas en Portugal han dado la mayoría absoluta al Partido Socialista, que aumenta 9 escaños, y el conjunto de la izquierda ha retrocedido; el Bloco pierde 14 escaños, y 6 el Partido Comunista, la mitad de los que tenía en el anterior parlamento. La nota preocupante: la extrema derecha se convierte en la tercera fuerza parlamentaria.

En Asia, las protestas en Kazajastán llevaron al presidente Tokáev a declarar el estado de sitio en el país, a la destitución del gobierno y a pedir ayuda a la OTSC. El aumento del precio del gas, las dificultades económicas, y el rechazo al régimen impuesto tras la desaparición de la Unión Soviética, son la causa de las protestas de los trabajadores. Aunque con el envío de soldados de la OTSC se ha recuperado la normalidad, la evolución de la crisis preocupa en Moscú y Pekín porque los problemas del país siguen sin resolverse. La represión de las protestas ha causado 225 muertos y miles de detenidos.

La guerra en Siria no se ha detenido. Daesh atacó a finales de enero la cárcel de Ghweran, donde los kurdos de las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, mantienen prisioneros a casi cuatro mil islamistas. En la batalla murieron trescientos islamistas y kurdos. Por su parte, Israel organizó en enero ejercicios con decenas de aviones de su Fuerza Aérea simulando un ataque masivo a las instalaciones nucleares de Irán. Arabia bombardeó una prisión yemení en poder de los hutíes causando casi cien muertos, muchos de ellos emigrantes africanos, y las instalaciones de telecomunicaciones en el puerto de Hudaydah, donde asesinaron a varios niños. Blinken ha manifestado a Riad el compromiso estadounidense con las dictaduras del Golfo para "defenderse de las amenazas del Yemen".

Afganistán corre el riesgo de un colapso económico. La ONU ha pedido a Estados Unidos y al Banco Mundial que descongelen los fondos afganos que siguen bloqueados desde el retorno del talibán al poder. En Libia, tras ser postergadas las elecciones del 24 de diciembre de 2021 hasta el mes de junio de 2022, la pugna entre facciones se agrava. El parlamento de Tobruk designó a Fati Basaga nuevo primer ministro, que convive con el otro primer ministro nombrado por Trípoli, Abdelhamid Dabeibah, que sobre el papel dirige un gobierno de unidad nacional. Al mismo tiempo, la situación de los refugiados en el país es desesperada. Los acuerdos de 2017 con Italia, y por extensión con la Unión Europea, han supuesto más de 30 millones para los guardacostas libios, y la Unión Europea ha entregado 450 millones para que frenen la emigración, sabiendo que la guardia costera carece de control político y no garantiza los derechos de los inmigrantes. Desde entonces, han muerto en las aguas bajo su control más de ocho mil personas. En 2021, devolvieron a más de 30.000 personas. La Unión Europea quiere continuar con ese programa italiano de ayuda a los guardacostas libios, que si nada lo impide se renovará automáticamente. Los guardacostas libios financiados por la Unión Europea

capturan a inmigrantes en el Mediterráneo, los encierran en cárceles y violan todos sus derechos.

Un golpe de Estado en Burkina Faso ha derrocado al presidente Roch Kaboré, que anunció su dimisión. La asonada se añade a los golpes de los últimos meses en Sudán, Mali, Chad y Guinea-Conakry, además de una intentona fracasada en Níger y del reciente golpe de estado fallido contra el presidente de Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, que configuran una seria crisis en el Sahel y en el centro de África. El gobierno golpista de Mali pretende aplazar hasta 2026 las elecciones previstas para febrero de 2022.

Finalmente, en América, en 2022, se convocan elecciones en México, Costa Rica, Perú y Chile, además de las parlamentarias de marzo y presidenciales de mayo en Colombia, que se añaden a las elecciones generales en Brasil de octubre. En Perú, pese a sus pocos meses como presidente, Pedro Castillo ha anunciado otro cambio de gobierno, presionado por la oposición y por sectores de su propia coalición, que se encuentra dividida. La Corte constitucional de Colombia declaró, en una ajustada votación, una vulneración masiva de la seguridad y los derechos de los ex guerrilleros de las FARC que suscribieron el Acuerdo de paz. Según la ONU, desde la firma del acuerdo y hasta finales de 2021 habían sido asesinados al menos 303 exguerrilleros, además de trece dirigentes sociales en lo que va de 2022. La renegociación de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional ha resquebrajado la coalición de gobierno que sostiene a Alberto Fernández.

En Cuba, nuestro partido y una impórtame delegación del PIE han estado presentes en las actividades de denuncia del 60 aniversario del ilegal bloqueo estadounidense a la Isla, recibiendo el agradecimiento expreso del pueblo cubano y de las autoridades del Gobierno y del Partido.

En Chile, se ha anunciado el nuevo gobierno de Boric, que contara con ministros y otros altos cargos procedentes del Partido Comunista.

II.- El conflicto internacional por el control de la energía y los nuevos materiales estratégicos. Los intentos de los EEUU de mantener su hegemonía como única potencia mundial. El agotamiento de las principales fuentes de energía fósiles y la escasez de materias necesarias para la producción de energía con fuentes renovables, de menor retorno energético, nos sitúan a las puertas de un escenario de crisis energética global e inevitable decrecimiento. A este escenario de crisis energética y de materiales le acompañan dos aún más graves por sus características de irreversibilidad y de afectación estructural a la vida tal y como la conocemos: la crisis climática y la de biodiversidad. La conjunción de estas crisis conlleva, por un lado, la enésima situación de grave deterioro económico y social de miles de millones personas a lo largo y ancho del planeta, que ven agudizada aún más su lucha diaria por la mera supervivencia. Y, por otro, un desafío generalizado sin precedentes: la vida y las condiciones necesarias para su desarrollo en buena parte del planeta están en riesgo, cuando no directamente en vías de colapso. Ante las consecuencias de la crisis energética y ecológica y de limitación de recursos, la respuesta está siendo el acaparamiento y una concentración aún mayor del beneficio. Ni las responsabilidades, ni las consecuencias, ni las capacidades para mitigar y

revertir esta situación son iguales entre todos los actores de la comunidad internacional. Sin embargo, nos encontramos una situación perversa: el pequeño grupo de actores con mayor responsabilidad y los que mayor capacidad de actuación tienen son, a su vez, los mayores beneficiados de la insostenibilidad del modelo económico y comercial hegemónico y los que dominan los foros de toma de decisiones. A esto se suma la resistencia de los EEUU a asumir que ha dejado de ser la potencia económica y militar hegemónica tras el fin de la guerra fría, lo que se revela como el principal motivo por el cual Europa está viviendo una grave situación de confrontación política militar entre los EEUU y Rusia, con Ucrania como escenario del conflicto. EEUU ha forzado esta crisis también con la intención de conseguir un nuevo escenario de control energético y reforzar su papel en el mercado internacional de energía, como se acredita comprobando que, a pesar de su distancia con Europa, en enero EEUU ha sido el principal suministrador de gas a España, por delante de Argelia y por supuesto de Rusia.

España debe adoptar una actitud activa a favor de la paz y en contra de comenzar un conflicto y en caso de que finalmente el conflicto ocurriera garantizar la no intervención de nuestro país.

Simultáneamente al trabajo político que nos corresponde hacer en el seno del gobierno de coalición y con la mayoría parlamentaria que sustenta este gobierno es imprescindible que nuestro partido incremente su trabajo de construcción de un amplio movimiento por la paz que haga oír el clamor histórico de nuestra sociedad en contra de las guerras como ha ocurrido en anteriores crisis bélicas internacionales en las que España se ha destacado por su amplia capacidad de movilización de todo nuestro pueblo para exigir que no haya guerras. Es urgente que nuestro partido actúe en las siguientes líneas:

1. Reactivar urgentemente el movimiento por la paz.
2. Crear comités ciudadanos en toda España para convocar movilizaciones: hay que tomar la iniciativa, sin sectarismos, pero sin prolongar innecesariamente reuniones preparatorias, que dilatan los plazos y restan energías. Pueden realizarse rápidamente convocatorias abiertas a las que se vayan sumando fuerzas, incorporando a los sindicatos.
3. Crear un amplio movimiento en la opinión pública que exija la retirada de las fuerzas militares españolas y europeas de la zona en conflicto a consecuencia de la crisis, así como la creación de una zona desmilitarizada.
- 4.- Denunciar la agresividad de la OTAN y su expansión permanente hacia el este. España debe ofrecer las opciones de la diplomacia, la distensión, la desescalada y la desmilitarización de la crisis y de la región, en un contexto en el que Europa debe optar por soluciones diplomáticas negociadas y por el desarme en el continente y en el planeta.
5. Recuperar el mensaje "No a la guerra". "España no debe contribuir a una guerra"; "España no debe repetir el sangriento error de la guerra de Iraq".
6. Preparar los trabajos de la contra cumbre de la OTAN de junio de 2022 en Madrid y activar los debates sociales sobre alternativas multilaterales para garantizar la seguridad humana frente a alianzas militares obsoletas e imperialistas como la OTAN.

III.- La coyuntura política en nuestro país y la lucha del PCE por los derechos de la clase trabajadora. Tras los resultados de las elecciones autonómicas en Castilla y León, el Partido Popular ha entrado en una espiral de enfrentamiento interno, dimisiones de la máxima dirección incluida, que evidencia una grave crisis en el sistema de representación política de nuestro país. La hegemonía política entre las fuerzas de la derecha política se encuentra en un momento de disputa entre la ultraderecha de Vox, por una parte, y el Partido Popular por otra. Sin embargo esta nueva expresión de la crisis interna en el Partido Popular, desatada con la excusa de la denuncia de Casado a Ayuso por una evidente supuesto de corrupción familiar, nos advierte sobre una posible reconfiguración de la derecha política española, reconfiguración que puede tener como resultado el desplazamiento del centro de equilibrio de la derecha hacia posiciones claramente “trumpistas” –populismo ultraderechista- construidas tanto sobre los postulados autoritarios negacionistas de Vox cómo sobre el ultra neoliberalismo, también negacionista, que hasta ahora ha venido caracterizando el discurso y las medidas adoptadas por Isabel Díaz Ayuso. Veremos si esta nueva crisis supone un fortalecimiento de la derecha española -como todo parece indicar que va a ocurrir- o si su resultado, descontando la práctica desaparición de Ciudadanos, es su debilitamiento por la conflictividad y disputa interna. A estas alturas, parece que claro que la sucesión de nuevos casos de corrupción, no afectan al electorado del Partido Popular ni a sus liderazgos. La base social y política de la derecha española cada vez carece más de ética. Tiene asumido que no es reprochable la apropiación de los recursos públicos en provecho particular.

Esta nueva coyuntura de reorganización de la derecha es un elemento más - junto a las dificultades para avanzar en la implementación del acuerdo del Gobierno de coalición- para hacernos concluir la necesidad de dedicar el máximo de esfuerzo a la organización del conflicto social y sindical, con la vista puesta en activar una nueva fase de movilización social que permita crear una correlación de fuerzas más favorable a los intereses de la clase trabajadora y de la izquierda.

En los últimos meses asistimos a una recuperación de la movilización popular y de clase tras el parón ocasionado por la pandemia, que limitó cuando no, impidió la expresión de las luchas en la calle y obviamente cualquier pretensión de masividad. Estas movilizaciones están teniendo carácter sectorial o territorial, pero lejos de ser hechos aislados tienen denominadores comunes que debemos analizar para tener un buen planteamiento y situar prioridades y tareas.

Por un lado, están las movilizaciones por la sanidad pública de Madrid, Andalucía - reseñable las grandes manifestaciones del pasado 19 de febrero- o El Bierzo, a la que añadir la huelga de Sanidad de Euskadi de los días 25, 26 y 28 de febrero. Estas movilizaciones, y otras en defensa de los servicios públicos, tienen una importancia fundamental, con la perspectiva de que se traduzcan electoralmente para desalojar a la fuerzas que recortan y privatizan de los gobiernos autonómicos y locales en las elecciones de mayo del 2023. Deben ser prioridad para las organizaciones territoriales.

Por otro lado, hemos asistido y asistimos a conflictos colectivos en el marco de la negociación de convenios, como en el sector del metal con huelgas en Cádiz

y Alicante y las movilizaciones en Barcelona y Álava o las importantes huelgas del sector conservero, de Louis Vuitton o de las residencias de la tercera edad de Navarra. En los próximos meses vamos a asistir a una intensificación de estas movilizaciones en la batalla para que los avances de la reforma laboral, de la subida del SMI lleguen a todas las empresas del país. Debemos articular una campaña llamando a la clase trabajadora a luchar para que esto suceda y apoyar estos conflictos en todo el territorio. Además, está en negociación el Acuerdo Interconfederal de la Negociación Colectiva que puede necesitar de la presión de la movilización para que sea satisfactorio para la clase trabajadora.

Durante los próximos meses, sí tendremos movilizaciones en las que todo Partido debe implicarse al máximo para impulsar y organizar un nuevo ciclo de movilizaciones a las puertas de la primavera: 8 de marzo, 14 de abril y 1º de mayo-, la ILP de la regularización y la Consulta Popular Monarquía - República. En todas estas movilizaciones nuestro partido tiene que jugar un papel organizador insustituible para garantizar su éxito.

El PCE recuerda a toda su militancia, a sus estructuras sectoriales y territoriales, la necesidad e importancia de acompañar la lucha por nuestras reivindicaciones con el máximo de movilización social posible de organizar en cada momento.

IV.- Las movilizaciones del 8M. El área de feminismo se ha venido reuniendo para analizar colectivamente la situación y el nivel organizativo de las asambleas feministas de cara al 8M. También para definir como debe ser el activismo de las comunistas del PCE en este frente de lucha y acordar acciones y campañas que ayuden a reforzar la convocatoria. Se acordó que nuestro trabajo debe dirigirse especialmente a que el próximo 8 de marzo, día Internacional de las mujeres trabajadoras, sea una jornada de movilización masiva en las calles.

Debemos incidir en que es necesario un discurso propositivo y muy claro que llegue a la realidad concreta de la mayoría de las mujeres. Denunciar todas las violencias, poner en valor el eje laboral desde un feminismo de clase, visibilizar la feminización de la pobreza y proponer medidas para erradicarla, la defensa de los servicios públicos, la conciliación, los cuidados y la dependencia con la propuesta de un sistema de cuidados público desde la óptica de una sociedad corresponsable. En este sentido, la reforma fiscal progresiva es una propuesta feminista porque es necesaria para poner en marcha un Sistema de Cuidados Públicos Universal.

Es necesario recuperar aquella consigna de las grandes movilizaciones de 2018 y 2019 que -Si las Mujeres Paramos el Mundo se Para- porque en la actualidad con la pandemia se ha evidenciado aún más que nunca que las mujeres somos la mayoría de las cuidadoras, las que sostenemos la vida. Al mismo tiempo que hemos precarizado aún más nuestras vidas. Situando la contradicción capital vida como uno de los ejes importantes del 8M.

Recuperar la idea de que el feminismo es esencial para la defensa de la vida, de nuestros derechos y conquistas. Para seguir avanzando en igualdad. Frente

a quienes niegan la desigualdad y las violencias que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. En este sentido debemos alzar también la bandera contra el fascismo misógino que avanza en el mundo y en España de la mano del PP y VOX, que odia a las mujeres y viene con una agenda antifeminista que está calando muy sutilmente en un sector de la juventud.

En este sentido las comunistas del PCE hemos diseñado una campaña para este 8 de marzo con el lema a "las rojas no nos paran" que se apoya en un manifiesto que confronta las dos agendas, la de las rojas, la feminista con la de las derechas la antifeminista.

Somos conscientes de que cara al 8M falta tensión por factores diversos, entre ellos la pandemia y los desencuentros que se han generado alrededor de la prostitución y la ley Trans. Las comunistas estamos acostumbradas a nadar contracorriente y para nosotras esto no debe ser un hándicap sino una situación que nos debe hacer crecer. Entender que nuestro esfuerzo es más necesario que nunca.

Por ello, debemos seguir haciendo lo que hemos hecho siempre. Coser y hacer de pegamento poniendo en valor lo que une y dejar fuera los posicionamientos que generan conflictos. Tenemos que organizar estrategias para neutralizar y evitar los intentos de dinamitar al movimiento feminista.

Para conseguir nuestros objetivos a corto y medio plazo, desde el área de feminismo nos hemos venido reuniendo con diferentes actores e impulsando diversas iniciativas: con la Secretaría de Igualdad confederal de CCOO para coordinar el trabajo desde el feminismo de clase en la organización del 8M y apoyar la Reforma laboral desde la mejora que supone para las condiciones laborales de las mujeres; impulsamos el manifiesto firmado por más de cien organizaciones de mujeres de todo el mundo "¡No en nombre del Feminismo!" a través de la Red Internacional de Mujeres Antiimperialistas, ante el intento de instrumentalización del movimiento feminista por parte del imperialismo de EEUU contra el gobierno de Nicaragua; promovimos una reunión feminista mundial el 12 de febrero a través del Foro de Europa con la RIAOMPI y la FDIEM para cohesionar el movimiento feminista contra el avance de la alianza criminal patriarcado y capital, en la que participaron entre 55 y 60 compañeras de diferentes organizaciones de mujeres de regiones y países del todo el mundo; acordamos una campaña mundial que se iniciará el 1 de marzo con el hashtag #StopAlianzaCriminal que se asociará a las acciones políticas reaccionarias de las derechas, el fascismo y el imperialismo que afectan directamente a la vida de las mujeres.

V.- La convalidación parlamentaria de la reforma laboral. A principios de febrero el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto-Ley que aprobaba la reforma laboral, La convalidación ha sido el resultado de una votación muy ajustada, saldada favorablemente gracias a un error de un diputado del Partido Popular. Ya hemos analizado en las últimas reuniones de órganos de nuestro partido, que la reforma laboral supone un positivo cambio de rumbo en la política laboral seguida hasta ahora en España. Por primera vez en muchos años es una reforma que recupera derechos de los trabajadores y qué frena el paradigma neoliberal de recorte de derechos laborales y mercantilización del

mundo del trabajo. Igualmente hemos analizado la importancia política de esta reforma y señalado las medidas concretas que incorpora para acabar con la precariedad laboral y fortalecer el papel de los sindicatos en las relaciones laborales a través de la negociación colectiva¹, lo que sin duda provocará una mejora de las condiciones laborales y por tanto una mejora de las condiciones de vida de la clase obrera.

La reforma laboral puede por tanto contribuir a una nueva correlación entre las fuerzas del capital y las fuerzas del trabajo, una correlación más favorable a los intereses de la clase trabajadora y por tanto también va a suponer un importante avance político para las posiciones de nuestro Partido y de todo el espacio político de Unidas Podemos en el gobierno de España si nos permite mejorar la correlación de fuerzas en nuestra acción política cotidiana.

Sabemos también que el acuerdo alcanzado no resuelve todos los problemas del mundo del trabajo. Quedan muchos derechos que recuperar y ampliar, aspectos no menores de la gran reforma laboral progresivamente impuesta desde 1994, tanto en términos de flexibilidad interna -movilidad funcional y geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, etc.-, como en términos de flexibilidad externa, en concreto el abaratamiento del despido.

Pero gracias a nuestra presencia en el gobierno hemos conseguido un giro sustancial en la actividad desplegada por los poderes públicos para regular las relaciones de trabajo, incluyendo una subida del SMI de más de un 27% desde 2019. El ordenamiento jurídico, y particularmente las normas aplicables a las relaciones de Trabajo, expresa siempre una determinada relación de fuerzas entre clases, un equilibrio precario e inestable entre intereses contrapuestos de los grupos sociales. Las luchas populares atraviesan la política social y están constitutivamente inscritas en el proceso de reforma de la legislación laboral. Por eso, para calibrar el verdadero alcance de la norma que se convalidó el 3 de febrero, la pregunta decisiva que hay que responder es si los trabajadores como clase ven incrementado su poder después de su entrada en vigor. Y la respuesta no ofrece lugar a dudas: aumentan su poder en el ámbito de las relaciones individuales de trabajo merced a una mayor estabilidad, y en el ámbito de las relaciones colectivas gracias a la mayor capacidad contractual de sus organizaciones representativas. Por primera vez en treinta años, la reforma del mercado de trabajo no se orienta a preservar los beneficios empresariales, sino a proteger los derechos e intereses de la mayoría social. Finalmente, las movilizaciones de la última década han dejado su impronta en nuestra legislación laboral.

Pero la aprobación definitiva de esta reforma laboral se ha realizado a costa del debilitamiento del denominado pacto de investidura, cuyo corazón había sido la alianza construida por Unidas Podemos con las fuerzas de la izquierda nacionalista -EH Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya- más el PNV. Hemos analizado en distintas ocasiones como el Partido Socialista busca permanentemente una nueva correlación de fuerzas parlamentaria que debilite a Unidas Podemos, para lo que mantiene la vana ilusión de hacer innecesaria la alianza de las fuerzas del pacto de investidura que viene

¹ <https://pce.es/el-pce-ante-la-reforma-laboral-la-clase-obrera-avanza-en-derechos/>

manteniendo al gobierno. Su aspiración es asentar una táctica de “geometría variable” que justifique su giro al centro. Como hemos venido analizando hasta la saciedad y ahora se ha acreditado, es absolutamente inviable otra mayoría de progreso diferente a la del pacto de investidura, mayoría que construimos con mucho esfuerzo y enfrentando situaciones muy difíciles que incluyeron la repetición electoral de noviembre del año 2019. Sin el mantenimiento del pacto de investidura es inviable el gobierno de coalición.

VI.- Cumplimiento del programa de Gobierno de coalición. Finalmente, la reforma laboral ha sido convalidada, pero con un gran desgaste político para las fuerzas del pacto investidura, lo que obliga a recomponerlo a la mayor brevedad para abordar los siguientes retos, todos ellos de mucha importancia para la recuperación de derechos civiles sociales y laborales. No olvidemos que se encuentran pendientes de aprobación, entre otras, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la aprobación de una nueva ley de memoria democrática que nuestro partido viene reivindicando desde hace años y la despenalización de los actuales delitos de libertad de expresión. Y también en breve va a comenzar una nueva batalla para aprobar a una Ley de Vivienda que controle y reduzca los precios de los arrendamientos de viviendas en España y que a la vez pueda hacer realidad nuestra reclamación de que la vivienda sea un derecho y no un objeto de especulación en el mercado capitalista.

Transcurridos ya dos años desde el inicio de la investidura también es necesario impulsar lo establecido en el acuerdo de gobierno respecto a aprobar una reforma fiscal que acabe con la evidente desigualdad en la tributación existente en España entre trabajadores y empresas. Son precisamente los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas quienes más tributan, frente a las grandes empresas y en especial los bancos, cuyo tipo medio efectivo de tributación rara vez superan el 6% sobre sus beneficios. Recientemente los portavoces de la asociación de técnicos de la Hacienda Pública GESTHA, han recordado que en los últimos 14 años en España se ha reducido la recaudación en el concepto de Impuesto de Sociedades en un 40%.

Por todo esto, la reforma fiscal va a suponer un importante debate social, en el seno del gobierno de coalición y entre los distintos partidos políticos que apoyan a este, con una previsible intervención de los grupos económicos en el debate, a través de los grandes medios de comunicación, para mantener sus privilegios fiscales.

En esa confrontación política, es previsible que encontremos una fuerte posición favorable a mantener una baja tributación del capital y de las rentas empresariales, sustentada sin duda por las fuerzas de la derecha, pero también por sectores del Partido Socialista y por el Partido Nacionalista Vasco. Nos corresponden construir la hegemonía social de la posición que defenderá la necesidad de igualar el esfuerzo fiscal de los trabajadores con el que corresponde que hagan las empresas y en general los rendimientos del capital, y conseguir que el esfuerzo tributario sea finalmente más importante entre quienes más patrimonio y beneficios económicos disfrutan.

Para continuar impulsado una fase expansiva del gasto público como herramienta para la reconstrucción y salida de la crisis del COVID, es necesario incrementar la capacidad de recaudación fiscal y al menos acercarnos a la media europea, de la que nuestro país aún se encuentra casi 6 puntos por debajo.

Nuestra defensa del medio ambiente y los recursos naturales frente a la especulación y depredación del capital, no obligan en estos momentos a priorizar la defensa de Doñana, que se encuentra en riesgo debido a una sobre explotación de sus recursos acuíferos. Lo está después de que el Parlamento andaluz, con los votos de PP, Cs y Vox y la abstención del PSOE, se iniciase la tramitación de una proposición de ley que pretende regularizar miles de hectáreas de cultivos ilegales, para amnistiar pozos ilegales.

Se trata de un auténtico atentado medioambiental que condenaría a muerte a Doñana, que ya sufre un riesgo cierto de desertificación, y además supone una clara injusticia con respecto a todo el sector agrícola que desarrolla su actividad legalmente.

La razón es clara: no hay agua para más. Hablamos de un acuífero que lleva años sobreexplotado y que no da más de sí, por lo que esta decisión de Juanma Moreno y sus socios ha hecho saltar todas las alertas. En el Parlamento, Unidas Podemos por Andalucía ha sido el único grupo que ha votado en contra, pero también el Gobierno de España, la Comisión Europea o la UNESCO han mostrado su rechazo.

Doñana es una joya, no sólo de Huelva, sino de Andalucía y España. Es la reserva natural más grande de Europa. Por eso vamos a seguir defendiéndola, intentando paralizar este ataque y ofreciendo alternativas para que cuidemos Doñana y sea posible el desarrollo sostenible de su entorno. Sin agua no hay Doñana ni hay agricultura, así que la solución no puede pasar por regularizar la extracción ilegal de agua del acuífero. Estamos convencidos de que hay una mayoría social en Andalucía que es consciente de la emergencia climática que enfrentamos, que quiere cuidar de esa joya que es Doñana y que quiere una Andalucía mejor en la que las actividades económicas se desarrollen de manera sostenible.

El Partido Comunista de España e Izquierda Unida no debemos dejar pasar la capacidad de intervención para conseguir los anteriores objetivos que se derivan de nuestra vinculación al gobierno de España.

VII.- Las elecciones en Castilla y León. Análisis y conclusiones. Hemos concurrido a las recientes elecciones autonómicas en Castilla y León tras haber alcanzado un acuerdo electoral con Podemos y Alianza Verde, que ha servido para que Unidas Podemos ha sido la cuarta fuerza política con 61.290 votos, un 5.08%. En primer lugar, hemos de felicitar a la militancia del PCE y de Izquierda Unida, tanto por haber conseguido un acuerdo que sin duda ha evitado que desapareciéramos de la asamblea legislativa castellano leonesa, como por el trabajo de desarrollo y extensión de la campaña electoral realizado por toda la militancia y simpatizantes de las organizaciones que participaron en la coalición.

La suma de los votos obtenidos en las elecciones autonómicas de 2019 por Podemos (4.95% y 67.918 votos) e Izquierda Unida (2.29% y 31.352 votos) ascendió a un total de 99.200 votos, un 7,24%. Podemos resulto ser la cuarta fuerza e Izquierda Unida la octava fuerza política. El resultado obtenido por Unidas Podemos en estas elecciones autonómicas es por tanto un mal resultado, así como es un mal resultado político en general para toda España. Para UP y para el conjunto de la sociedad, porque con esta convocatoria adelantada el PP ha dado impulso a VOX. También es negativo para nuestro espacio político, porque pasamos de 2 a 1 diputado y perdemos votos. Mantenemos un escaño en buena medida gracias a haber concurrido conjuntamente como Unidas Podemos. En caso de haber concurrido por separado muy probablemente hubiéramos perdido toda la representación institucional. Debemos reflexionar sobre las causas por las que la participación ha caído 7 puntos en Castilla y León y se ha desplomado de forma generalizada. Ha caído más donde la renta es más baja. Ha incrementado su apoyo la ultraderecha de VOX y los partidos regionalistas y candidaturas provinciales de la España vaciada y bajan Unidas Podemos, PSOE, C's y PP. Buena parte del voto perdido se ha ido a la abstención. El bipartidismo cae en todas las provincias, aunque sube muy ligeramente en algunas capitales como Segovia y Zamora. Por bloques, la izquierda (PSOE + Unidas Podemos) cae en todas las provincias. El bloque de las derechas sube en todas las provincias excepto en Soria, León y Ávila. Valladolid y Ponferrada son los municipios donde sacamos mejor resultado, aunque bajamos de forma generalizada. No cabe duda de que la unidad es el camino, e igualmente es indudable que Unidas Podemos continúa descendiendo en apoyo electoral, que es necesario dar un impulso al proceso de convergencia política sumando nuevas fuerzas, colectivos y personas. Poner en marcha un proceso de fortalecimiento de la izquierda depende en buena medida de incrementar nuestro arraigo en el territorio.

Sólo una parte del descenso de la izquierda en Castilla y León puede explicarse por la subida de UPL y Soria Ya, que en todo caso parecen haberse nutrido claramente de voto progresista. La crisis territorial sigue agudizándose de formas diferentes, y son las opciones de izquierdas las que parece que salen perjudicadas por ello.

Tampoco debemos obviar que la estrategia del PP ha fracasado. La consolidación de la extrema derecha es una mala noticia para España, a la vez que también impide dificulta que el PP consiga presentarse como la alternativa al gobierno de coalición de España. El freno a la ultraderecha depende hoy más que nunca de conseguir aprobar medidas en el gobierno que mejoren claramente la vida de la gente, y que acaben o al menos moderen la crisis territorial, todo ello combinado con un intensivo trabajo cultural e ideológico, de explicación de las consecuencias del avance de la ultraderecha en materia de eliminación de derechos civiles y sociales, y con un trabajo de organización y atención de la convergencia política de la izquierda.

VIII.- El trabajo del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida por construir convergencia política y unidad popular. El PCE, en coherencia con lo aprobado junto con nuestros compañeros y compañeras de Izquierda Unida, continuará trabajando para que la ampliación del espacio se realice con una

sólida base, proceso que corresponde organizar y extender desde las fuerzas políticas que hoy se organizan en torno a la mesa confederal de Unidas Podemos, hacia otras fuerzas y expresiones organizadas, como ya estamos trabajando en Andalucía. Solo así estaremos en las mejores condiciones posibles para abordar los próximos retos políticos de las elecciones municipales y autonómicas del 2023.

El Partido Comunista de España debe apoyar prioritariamente el trabajo que nuestros y nuestras camaradas andaluces vienen haciendo desde hace meses para ampliar la convergencia política de la izquierda política y social. Si Castilla y León ha sido la prueba de qué la unidad en Unidas Podemos es la condición imprescindible para resistir a fecha de hoy, las elecciones autonómicas en Andalucía van a ser el primer paso del despegue de la nueva alianza política y social, de la organización de ese futuro Frente Amplio, de su ampliación con nuevos colectivos políticos para recoger los frutos del trabajo que el PC de Andalucía e Izquierda Unida-Los Verdes- Convocatoria por Andalucía, vienen realizando en los últimos años.

El PCE debe contribuir a impulsar el necesario proceso de interlocución con la sociedad civil, requisito para la ampliación del espacio político. Trabajar para crear nuevos espacios de encuentro con la sociedad civil y los movimientos sociales, impulsando el protagonismo del nuevo liderazgo de nuestro espacio, y, a la vez, colaborando con Izquierda Unida en la realización de las tareas acordadas en las últimas reuniones de sus órganos de dirección: mantener e impulsar espacios de coordinación entre las fuerzas política que conforman Unidas Podemos, para que todas impulsen el proceso de ampliación del espacio político con la máxima coordinación y coincidencia posible, y a la vez dando certezas a la militancia sobre el proceso a seguir.

En esta nueva fase de organización para la superación de Unidas Podemos, el PCE también debe trabajar para coordinar y cohesionar los distintos grupos institucionales y coordinaciones territoriales en donde participemos, ayudando a garantizar los mecanismos colectivos de toma de decisiones, de priorización de temas a abordar y a fijar posiciones políticas. Dar estabilidad al espacio político para organizar su ampliación y fortalecimiento.

Madrid, 17 febrero 2022